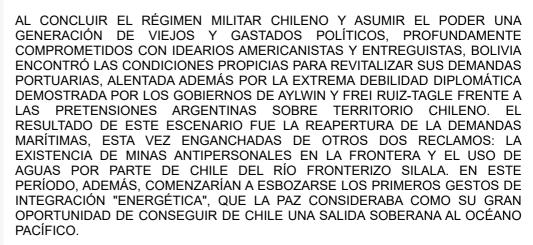
HISTORIA DE LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA, PARTE VI: EL RECLAMO SE REVITALIZA CON LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN. EXCUSA DE LOS CAMPOS MINADOS Y DE RÍO SILALA PARA INSISTIR EN LA DEMANDA (1988-2002)

-Ampliado y actualizado el 04 de abril de 2008-





Ya no se admite Adobe Flash Player

Fin del Gobierno Militar. La Moneda en manos del entreguismo compulsivo
Paz Zamora intenta negociaciones reservadas con La Moneda
Las excusas de las "minas antipersonales" y la "destrucción de hitos"
Bolivia viola Tratado de 1904 al privatizar líneas ferroviarias Arica-La Paz
El regreso de Bánzer: más reclamos por los campos minados
Intentos por involucrar a Japón. Nuevas acusaciones infundadas
Intentos por involucrar al Vaticano. Truculencia paceña
Últimos muñequeos de Bánzer. Debut de Jorge "Tuto" Quiroga
Bolivia dividida por proyecto del Gasoducto

Fin del Gobierno Militar. La Moneda en manos del entreguismo compulsivo

En 1988 comenzó el fin del Gobierno Militar. El 5 de octubre se realizó el plebiscito nacional que decidiría la continuidad del Gobierno del General Pinochet o, en su defecto, elecciones presidenciales para el año siguiente. Por casi ocho meses, la sociedad chilena parecía dividida sólo en dos grupos: los del "SÍ" y los del "NO", ambos clamando para sí un triunfo rotundo. Sin embargo, el triunfo sería para el rechazo a la continuidad del General Pinochet por cerca del 54% de los votos.

La expectativa que se abrió en el mundo con lo sucedido en Chile acaparó la atención de los medios de prensa y los espectros políticos internacionales. Diecisiete años de Gobierno Militar llegaban pacíficamente a su fin y las elecciones quedaban fijadas para el 14 de diciembre del año siguiente. La expresión "vuelta a la democracia" fue el sello que caracterizó la época en aquella época para referirse a

Chile. Así, en diciembre de 1989, las elecciones fueron ganadas por la Concertación de Partidos por la Democracia, liderados por el demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar, logrando derrotar al candidato del Gobierno, Hernán Büchi Buc, ex ministro del General Pinochet, cuya candidatura débil y poco convincente fue más un saludo a la bandera que una opción presidenciable real, al punto de que prácticamente desapareció de la vida política en los años siguientes.

Los problemas para la soberanía chilena comenzaron casi el mismo día de marzo de 1990 en que asumió el Presidente Aylwin. Formado en la crema de las ideas más americanistas e integracionistas de añejo cuño, el nuevo Gobierno rápidamente intentó presentarse a los ojos del mundo como uno abierto, receptivo, integrador y, por sobre todo, radicalmente distinto al Gobierno Militar que le antecedía. Aylwin tenía especial necesidad de cultivar esta imagen, pues se sabía de sobra que había apoyado apasionadamente el alzamiento militar contra el gobierno de Salvador Allende, en 1973.

Aprovechando este ambiente, miembros de toda clase de sectas y grupos religiosos o políticos proclives al reivindicacionismo boliviano operando en Chile, tomaron posiciones y algunos hasta se trasladaron a Arica e Iquique, desde donde podían mantener mejores relaciones con sus mentores altiplánicos y preparan algunas publicaciones o campañas. Lo mismo ocurrió con respecto a la Argentina, entre grupos ideológicos de tendencia posmodernista muy ligados a ciertos filósofos políticos trasandinos. Apareció también la casta de los "retornados", políticos que habían pasado toda su madurez en el exilio, en grandes potencias del mundo, donde fueron testigos de procesos de intercambio y vecindad bastante acordes a las realidades culturales de naciones. pero ahora Chile que, en е convenientemente en importantes cargos públicos llenos de privilegios y consideraciones, pretendían emular ignorando que la realidad contextual hacía imposibles similares procesos de integración regional. Una cuota no menos importante llegaba a ignorar directamente los más importantes problemas que Chile había tenido con su vecindad en años recientes, especialmente con la Argentina.

En tanto, en Bolivia las cosas parecían prometedoras. El Congreso había elegido a Jaime Paz Zamora como nuevo Presidente, el 5 de agosto de 1989, relevando a Paz Estenssoro. Todo aparentaba un recreo en el continuo y permanente estado de ingobernabilidad del país altiplánico. Conciente de la nueva época que comenzaba en Chile, crevó políticamente propicio anunciar su deseo de devolverle a su país una condición marítima, esperanzado en que el fin del Gobierno Militar chileno creara en Santiago condiciones necesarias para satisfacer las aspiraciones reivindicacionistas del "mar boliviano" y la revisión de ciertos aspectos históricos. De este modo, en abril de 1991 habría de llegar a Santiago una delegación de historiadores bolivianos portando la polémica versión de la Guerra Contra la Confederación y la Guerra del Pacífico contenida en la obra "Historia de Bolivia", de Humberto y José Vásquez-Machicado, y que fuera entregada en ceremonia al rector de la Universidad de Chile, Jaime Lavados. Esta obra, con afirmaciones tendenciosas y en casos notoriamente inexactas (especialmente sobre la labor del ministro yanqui James Blaine en el conflicto y el contexto de los tratados celebrados) ha sido la inspiración de muchos entreguistas chilenos que, con aires académicos, han rumiado líneas de la obra

reproduciéndolas como propias a pesar de lo fácil que es identificarlas y reconocerlas.

La popularidad de Paz Zamora creció en 1991, cuando consiguió que el Gobierno de los Estados Unidos le perdonara a Bolivia U\$341 millones de su deuda externa. En contraste, aquel año la aceptación del flamante Gobierno de Aylwin pasaba una de sus peores crisis luego del salvaje asesinato del Senador UDI Jaime Guzmán, por un comando terrorista. Ello no impidió, sin embargo, que concretase infames acuerdos internacionales como la Declaración Presidencial de 1991, que, a la larga, comprometió a Chile en la entrega formal de los territorios de Laguna del Desierto y Campo de Hielo Sur a la Argentina.

Sumados al acuerdo que Chile suscribió con Argentina y Brasil en septiembre, comprometiéndose a no producir ni utilizar armas químicas, y a la eliminación de las barreras arancelarias con México, también ese mes, todas las señales que dio La Moneda se mostraban encaminadas a intentar insertarse urgentemente en el contexto continental y trazar, desde ya, sendos proyectos de integración con sus vecinos. La oportunidad se ofrecía en bandeja para Bolivia y sus afanes de "reivindicación marítima".

Paz Zamora intenta negociaciones reservadas con La Moneda 🛖



Ese mismo año de 1991, en que Chile se arrojaba de lleno por la pendiente del entreguismo, importantes yacimientos de gas natural comenzaron a ser identificados al Este de Tarija, en Bolivia, cuyo potencial haría que la empresa Trans-Andean Parterns Inc. presentara ante las autoridades de La Paz un jugoso proyecto para sacar el producto por algún puerto chileno o peruano. Como se sabe, la estrategia histórica de Bolivia para intentar persuadir a Chile de satisfacer sus aspiraciones portuarias, ha sido ofrecer a cambio facilidades sobre lo que más falta al norte del país: aqua dulce y energía, por lo que las posibilidades del gas natural eran muy oportunas.

El 6 de noviembre, ambos países suscriben un Acuerdo de Control, Fiscalización y Represión del Narcotráfico, abriéndose también las puertas de futuras nuevas conversaciones sobre otros temas. Para esta clase de tentativas de discusión, bastaron las pocas reuniones en las que los representantes de Chile y Bolivia se encontraron en foros y congresos internacionales durante 1992 y 1993, repitiendo otro viejo error diplomático, como es atender de manera informal asuntos de vital trascendencia nacional. De esta manera, "El Mercurio" del lunes 5 de abril del año 1993 ya anticipaba en titulares que Bolivia podría estar negociando con las autoridades chilenas una posible salida al océano a través de gestiones privadas.

Hoy sabemos que, producto de este acercamiento, comenzaría a gestarse la negociación de una posible salida al mar para Bolivia enganchada a un proyecto mayor destinado a la exportación de gas natural por territorio chileno: el comodato para un gasoducto boliviano en alguna parte de la costa Norte de Chile Secretamente, el Canciller Enrique Silva Cimma había estado en contacto con su homólogo de La Paz, Ronald Mac Lean, durante la Cumbre del Grupo de Río realizada en Santa Cruz. Lo conversado allí entre ambos fue la base de las posteriores negociaciones con miras a otorgar a Bolivia una

"compensación territorial" entretejidas con gestiones empresariales. En la ocasión, el Canciller boliviano Mac Lean declaró con clarividencia:

"Por el momento a Bolivia no le satisface el hecho de que su salida al mar sea sólo en el ámbito económico. No es algo que el pueblo boliviano vaya a comprender o aceptar, pero las percepciones cambian con el tiempo".

Desde el momento mismo en que el Gobierno de Avlwin se había mostrado llano a atender las ofertas de negociación presentadas por Bolivia, Paz Zamora cayó presa de un frenesí triunfalista por ser el Presidente que devolvería a Bolivia su "condición marítima". En 1993, también se fijó la creación de un Comité de Fronteras que debía ser puesto en funciones a partir de 1998, acariciándose desde ya la posibilidad de lograr un acuerdo de complementación económica entre ambas naciones. Como ha sucedido antes ya, con estos avances el Palacio Quemado se creyó capaz de acelerar las conversaciones y cosechar frutos antes de terminado su período. Lamentablemente para él, sin embargo, la amenaza de la impopularidad que pendía sobre el gobierno entrequista de Chile próximo a las nuevas elecciones, trajo algo de juicio y calma a La Moneda, especialmente después de las manifestaciones de descontento y las críticas que recibía por todos los frentes la irresponsable y absurda decisión de resolver las controversias de Laguna del Desierto y Campo de Hielo Sur por mecanismos claramente entreguistas disfrazados de derecho. Un nuevo caso de entreguismo, esta vez con Altiplano, hubiese corrido el riesgo de ser castigado en las urnas.

El aparente retroceso en las conversaciones puso de cabeza a Paz Zamora. Iracundo, a sólo días de abandonar su mandato, declaró groseramente que Chile era "un país cavernario y retrógrado en el problema marítimo", acusando a sus habitantes de hacerce "los lerdos" al negarse a atender sus planteamientos. Acto seguido, realizó en Perú una chabacana y llorona ceremonia a la orilla de la playa, que incluyó la simbólica metida de sus pies al mar del Pacífico, ante la presencia de autoridades de ambos países.

Sin embargo, el *impasse* a penas empezaba, porque consultado sobre estas declaraciones, el Almirante chileno José Toribio Merino -con su usual estilo deslenguado y sarcástico- diría en otro de sus famosos "martes de Merino" (1º de agosto de 1993) una recordada cita del explorador alemán Hermann von Keyserling, que ha pasado al anecdotario de las agitadas relaciones chileno-bolivianas:

"Los bolivianos eran unos auquénidos metamorfoseados que habían aprendido a hablar, pero no a pensar".

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

SORPRENDENTE DOCUMENTO: Diario "El Mercurio", anticipando en su portada del <u>lunes 5 de abril del año 1993</u>, que Bolivia podría estar negociando con las autoridades chilenas una posible salida al océano a través de gestiones privadas. Hoy sabemos que, producto de este acercamiento entre las Cancillerías, comenzó a gestarse en los años 1993 y 1994 la negociación de una posible salida al mar para Bolivia enganchada a un proyecto mayor destinado a la exportación de gas natural por territorio chileno. A pesar de ello, en la ocasión e 1993 el Canciller Mac Lean declaró con insólita clarividencia: <u>"Por el momento a Bolivia no le satisface el hecho de que su salida al mar sea sólo en el ámbito económico. No es algo que el pueblo boliviano vaya a comprender o aceptar, pero las percepciones cambian con el tiempo" (pág. A11)</u>

Las excusas de las "minas antipersonales" y la "destrucción de hitos"

Continuando con una política que ya había acariciado Paz Zamora de la mano de organizaciones internacionales de Derechos Humanos, el nuevo mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR, que asumiera el mando en el Palacio Quemado en 1993, se propuso asumir también el problema de la mediterraneidad echando mano a asuntos derivativos.

Coincidentemente, comenzaban a oírse en el resto del mundo fuertes campañas en contra la existencia de campos de minas antipersonales, que habían causado varios accidentes con resultado de muerte o mutilación en países del África negra, Medio Oriente y al Sur de Asia. A pesar de que la cantidad de accidentados con los campos abandonados de minas que quedaron en la zona cordillerana del desierto de Chile era ínfima en comparación con las de aquellas naciones donde más se presionaba el retiro de las mismas, bastaron algunos pocos ejemplos de "burreros", narcotraficantes e ilegales para construir toda una leyenda negra de los "campos asesinos" instalados por Chile (omitiendo, por supuesto, que fue en el período en que Bolivia, Perú y Argentina planeaban una invasión simultánea contra el país cuando fueron instaladas) y la presentarían pomposamente ante la ONU y toda la trilla de organizaciones globalistas y humanitarias

posibles, muchas de ellas provistas de estratosféricas sumas de dinero y de poder para publicidad y campañas.

Al mismo tiempo, comenzaron a formularse desde La Paz curiosas denuncias sobre supuestos desplazamientos de hitos fronterizos, en términos muy parecidos a los que ha pretendido usar Perú, también, en otros períodos de sus controversias con Chile. En 1994, por ejemplo, la delegación de Bolivia ante la ONU presentó ante la Asamblea una denuncia según la cual Chile había destruido cerca de la mitad de los casi 100 hitos fronterizos de una amplia zona cordillerana de Atacama. La ONU acogió el reclamo y los bolivianos, envalentonados, intentaron realizar "comprobaciones en terreno" del estado de los hitos. A penas lograron encontrar algunos volcados por razones naturales perfectamente explicables que ellos mismos se habrían encargado de demostrar durante sus exposiciones ante el organismo, cuando señalaron el peligro de las minas antipersonales por el hecho de que, dadas las características del clima en la zona fronteriza, muchas de ellas se habían desplazado movidas por aluviones, lluvias o cambios del terreno, trasladándose peligrosamente hasta sitios donde no se tiene catastro ni señalización que advierta su presencia. Es más: algunos de estos hitos habíanse desplazado hacia el lado Oeste de la frontera, es decir, internándose en territorio chileno, por lo que difícilmente podría esperarse semejante acto de "astucia" de un "expansionista chileno" que le roba tierra a su propio país. Obviamente, estos casos fueron pasados de largo por los informes bolivianos.

Sin embargo, a la larga, la insistencia podía más que la lógica. Recordemos, además, que en materias de relaciones exteriores aquel año de 1994 no pudo ser peor. El Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su canciller José Miguel Insulza acataron de buenas a primeras el fallo arbitral para Laguna del Desierto, en octubre; sentencia que, como todos los expertos anticiparon, resultó ser adversa a Chile dada la cantidad de vicios y aberraciones de derecho que se permitieron con tal de que la Argentina aceptara el proceso. Ahora, arrojados por el tobogán del entreguismo, los políticos chilenos debieron comenzar la nueva entrega pendiente desde la infame declaración de 1991, esta vez en Campo de Hielo Sur. Esta capacidad de Chile para haber aceptado de la nada un conflicto en esta zona de hielos patagónicos, produjo grandes sentimientos de optimismo en las esferas bolivianas.

Como era de esperar, las presiones de La Paz ante los foros internacionales procurando el desminado de las fronteras -que era el único mecanismo de control de las vastas extensiones desérticas fronterizas, especialmente frente al problema del narcotráfico y las mafias traficantes de vehículos controladas precisamente desde Bolivia- ya habían sido acogidas con entusiasmo de parte de los entreguistas chilenos, con airados discursos entre los años 1995 y 1996, donde las muletillas de integración y confraternidad americana no faltaron, alegando "innecesaria" la existencia de tales campos de minas asesinas

Curiosamente, en similar período sendas denuncias de camioneros chilenos víctimas de abusos y atropellos por parte de funcionarios peruanos y bolivianos intentaron ser presentadas a las autoridades por los gremios respectivos, sin encontrar ecos de apoyo entre tanto político apasionado.

Bolivia viola Tratado de 1904 al privatizar líneas ferroviarias Arica-La Paz

Como se sabe, Chile construyó enteramente la línea férrea que une Arica y Alto de La Paz en cumplimiento del Tratado de 1904, inaugurando las obras 1913. La millonaria construcción, que ascendió a 4.063.561 libras esterlinas enteramente asumidas por el Estado de Chile, Bolivia habría de concretar una de las aspiraciones más antiguas del pueblo boliviano: conseguir una relación directa y vertebrada con el puerto de Arica y las aguas del Pacífico.

A pesar de que el tramo boliviano de las líneas, desde Charaña a Altos de La Paz, fue cedido a manos de la administración boliviana a partir de 1928, siempre estuvo en el ánimo altiplánico que alguna vez ambos tramos quedaran en su dominio, mirando con recelo y desconfianza el que Chile siguiera administrando una parte del mismo desde Arica a Visviri, aún cuando esto ocurriera dentro de su propio territorio.

Aproximadamente desde los años sesenta, el ferrocarril comenzó a decaer y a experimentar una baja en sus servicios debido a la tendencia connatural de Bolivia a relacionarse más con el eje del Atlántico que con el eje del Pacífico. El servicio experimentó un efímero repunte el año 1992 pero, tras casi un siglo de operaciones, los bolivianos optaron por continuar sus desplazamientos prefiriendo la carretera inaugurada en 1995. Intentando revertir la merma de actividades e ingresos, en marzo de 1996, La Paz anunció la privatización de la línea férrea, y el empresario José Saavedra Bánzer, sobrino del ex presidente Hugo Bánzer, adquirió al año siguiente el 60% de la línea en la licitación.

Esta acción de capitalización de las vías fue absolutamente atentatoria contra el Tratado de 1904, que entre otras cosas establecía al respecto:

"La construcción de la sección boliviana del ferrocarril de Arica al Alto de La Paz, como la de los demás ferrocarriles que se construyan con la garantía del Gobierno chileno, será materia de acuerdos especiales de ambos Gobiernos y en ellos se consultarán las facilidades que se darán al intercambio comercial de los dos países".

También desconocía lo expresado en la Convención para la Construcción y Explotación del Ferrocarril de Arica a La Paz del 27 de junio de 1905. Insólitamente, el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle dejó pasar limpiamente este atropello a los acuerdos, sin emitirse el menor suspiro siquiera desde la Cancillería de Chile. Más aún, sorprende que Bolivia haya reclamado unos años después por la privatización de los puertos de Arica, apelando precisamente al mismo principio que violó con estas decisiones.

Aunque la mayoría de los autores bolivianos alega prepotentemente que el Palacio Quemado estaba en su total derecho a ejecutar las privatizaciones de su tramo de las líneas sin consultar a nadie, hay excepciones como la del historiador y diplomático Ramiro Prudencio Lizón, quien escribirá después en un artículo titulado "Centenario del ferrocarril Arica-La Paz" (Diario "La Razón", 1º de marzo de 2005):

"La capitalización del tramo boliviano del Ferrocarril se efectuó sin haber consultado al Gobierno chileno, lo que constituyó a fin de cuentas, una trasgresión del Tratado de Paz de 1904. Chile no protestó por semejante arbitrariedad, porque esa contravención del Tratado, no le afectaba, sino solamente a Bolivia. En otras palabras, nuestro país había violado el Tratado de Paz en contra nuestra".

Si embargo, la decisión de Bolivia le significó un tiro por la culata del que aún se arrepienten sus analistas, pues Chile también hizo lo propio con su tramo. El 40% restante de las acciones sería adjudicado al Grupo Cruz Blanca al mismo momento que Saavedra Bánzer compraba su parte, a través de la Empresa Ferroviaria Oriental de Bolivia. Posteriormente, ésta traspasó su parte a la compañía *Genesse & Wyoming*, la que la vendió a Saavedra Bánzer, en agosto de 2002, dejando la totalidad de la línea de ferrocarril en manos del empresario boliviano que, para desgracia de su país, no pudo sostener el negocio. Prudencio Lizón agrega al respecto:

"Astutamente, el Gobierno de ese país (Chile) decidió hacer otro tanto. Traspasó la administración de su sector, de Arica a Visviri, a otra empresa chilena, que además, ya controlaba el sector oriental de nuestro sistema ferroviario. Determinó, asimismo, nombrar presidente de esa empresa a un ciudadano boliviano, lo cual serviría de pantalla para que aguí se creyese que había algún control nacional en ese tramo del Ferrocarril. Con la privatización de las dos secciones del Ferrocarril, las cuales quedaron en manos chilenas, nuestras ingenuas autoridades gubernamentales consideraron que el transporte de mercancías por ese medio podría modernizarse, y cumplir con más eficacia su misión de facilitar el comercio exterior boliviano. Pero sucedió lo contrario. Las dos empresas se pusieron de acuerdo para dar fin con este servicio, en violación flagrante del Tratado de Paz, el cual obliga a Chile a mantener permanentemente habilitada esta ferroviaria".

"¿Cómo es posible que el país permita que concluya definitivamente el histórico servicio prestado por ese Ferrocarril, cuya construcción se ha constituido en uno de los fundamentos del Tratado de Paz de 1904? ¿Y qué derechos tienen esos dos consorcios chilenos que controlan ahora los dos sectores del Ferrocarril para tomar una determinación semejante?"

Sin embargo, echando mano a la pasión autoexpiatoria de los autores bolivianos, comenta a continuación:

"Si hemos cometido un grave error al privatizar el sector nacional del Ferrocarril sin consultar a Chile, eso no es óbice para que el Gobierno chileno se permita ahora violar el Tratado de Paz y su acuerdo complementario, la mencionada Convención de junio de 1905, que determinaba su construcción y donde se señala que se debe asegurar a perpetuidad el libre tráfico del Ferrocarril".

En otras palabras, el error cometido por los propios bolivianos, debía ser endosado a Chile.

Para aumentar las desgracias, la administración Saavedra Bánzer quebraría el año 2005 luego de un bloqueo de huelquistas, seguido del terremoto de junio, que volvieron a dañar severamente el tránsito las líneas férreas. En octubre la situación del ferrocarril parecía insostenible y la administración debió cerrar operaciones, cesando completamente el servicio. La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) interpuso dos demandas a la administradora, por no cumplir con el contrato de concesión, y ésta reaccionó declarándose en quiebra en febrero del año siguiente. Entre otras cosas, la concesionaria alegaba que la mantención de las vías correspondía a EFE, cosa bastante discutible.

Por esta razón, el Senador por la Región de Tarapacá, Jaime Orpis recordada a principios de agosto 2006, que "es urgente restituir la vía férrea del ferrocarril Arica-La Paz y cumplir con el Tratado que lo ampara", precisamente para bloquear cualquier posibilidad de controversia en torno a este tema. Advertía también, que la cantidad de mercaderías que el ferrocarril se había marginado de movilizar por estas incapacidades, rondaban hasta entonces las 120 mil toneladas. Paradójicamente, entonces, tendría que ser Chile el país que se encargaría eventualmente de la reparación de la vía férrea. precisamente para cumplir con garantías que procura a Bolivia el mismo tratado internacional que busca desesperadamente cuestionar e impugnar y que había violado con el plan de capitalización al llevarlo adelante sin consultar a Chile, como hemos dicho.

El regreso de Bánzer: más reclamos por los campos minados 🛖



El año de 1997 sería aquel en que Hugo Bánzer regresó a la presidencia de su país, esta vez constitucionalmente y con las mismas promesas de los mandatarios bolivianos de "recuperar la cualidad marítima", aunque su voluntad estaba lejos de ensayar algún intento acuerdo como los que había protagonizado en la Declaración de Charaña, 22 años antes. Como ejemplo del grado en que fue retomada la fuerte predisposición confrontacional paceña, en un encuentro futbolístico del mes de junio, las banderas chilenas fueron expuestas en Bolivia sin la estrella blanca, removida intencionalmente del conjunto (como se sabe, la estrella simboliza con frecuencia la Victoria en códigos heráldicos). Un anticipo de lo que vendría, sin embargo, porque desde entonces los abusos y actos de chilenofobia boliviana no cesaron.

El 29 de septiembre de 1997, el ahora decrépito y pausado Bánzer presentaba ante la 52º Asamblea de la ONU en New York, un reclamo formal contra el vecino "mapochino" por la existencia de las minas antipersonales en la frontera, llamando a la solidaridad de los gobiernos de la región para provocar su retiro. Sin embargo, en el mismo encuentro agregó, sacando a la luz la esencia de sus intenciones:

"La demanda de retorno al Océano Pacífico con puerto propio y soberano es un objetivo irrenunciable, una condición vital del desarrollo regional. Pero, sobre todo, una reivindicación histórica indeclinable".

La treta era captar apoyo internacional contra los campos minados chilenas, pero para encausarlos de paso al asunto de la "salida al mar", con términos absolutamente reñidos con lo acordado en el Tratado de 1904. Más abajo veremos que la Cancillería y el Ministerio de Defensa de Bolivia intentaron acusar a Chile de estar protagonizando una "carrera armamentística" en la zona. Similares denuncias fueron presentadas, poco después, en Ottawa y luego, durante la invitación que formulara La Paz el 14 de octubre a la norteamericana Jody Williams, activista premiada con el Nobel de la Paz precisamente por su combate al uso y existencia de minas antipersonales. El 10 de ese mismo mes, el representante peruano en La Paz, Harry Beleván, se sumó al lobby de presión contra La Moneda, clamando también por el retiro de las minas del que su país era precisamente un gran responsable, tras restaurar las pretensiones de reivindicación militar de Arica en los años setenta, aprovechando el desabastecimiento de armas que pesaba sobre Chile.

De este modo, Chile fue suscrito a la Convención de Ottawa del 3 de diciembre de 1997, donde se comprometió no sólo a apoyar la prohibición mundial del uso de minas, sino también a retirar paulatinamente las disponibles o ya instaladas en sus fronteras. Para dicha labor de millonarias exigencias, se creó una Comisión de Desminado que informaría periódicamente a la ONU sobre el proceso, operando directamente con el Ministerio de Defensa. El objetivo era eliminar todas las minas explosivas que estaban en almacenes militares antes del plazo que la Convención ponía con límite en el año 2006.

Tras las intenciones humanitarias que los políticos bolivianos pretendían imponerle cínicamente al plan de desminado (y que incluía incluso una posible visita de la Princesa Diana de Gales a La Paz para apoyar las medidas de presión contra Chile, intento que falló tras su trágica muerte ese mismo año), la verdad es que el principal sentido de estas medidas era de índole absolutamente geoestratégica y militar, pues la cantidad de minas que durante los años setentas se habían instalado en gran parte de la frontera con Perú y Bolivia, impedían cualquier intento de penetración invasora desde alguno de estos dos países, resguardando muy convenientemente para los intereses chilenos dichas fronteras. No en vano los reclamos bolivianos fueron presentados poniendo a estas minas como ejemplo del supuesto carácter "agresivo" y "belicoso" del vecino país.

Además, para alegría de los narcotraficantes y sus respectivas patrias, Chile fijó para el año 2011 la eliminación total de los campos minados (en terreno) a lo largo de su territorio, labor que comenzaró el 2004 y para la cual ya se dispusieron monstruosas sumas de dinero sin que se prevean mecanismos de vigilancia o protección fronteriza en reemplazo de los que serán eliminados.

Intentos por involucrar a Japón. Nuevas acusaciones infundadas



El 1º de octubre de 1997, había asumido el nuevo cónsul boliviano en Chile, Mariano Baptista. De inmediato, se puso en contacto con varios entreguistas chilenos vinculados a institutos y centros de *medio pelo*, pero con algunas influencias en el mundo académico e incluso sobre el Gobierno Central.

Otro de los actos inmediatos del representante, fue instruir al ministro boliviano ante Perú, Jorge Gumucio, para intentar llegar a acuerdos directos con los privados japoneses que, por entonces, construían instalaciones portuarias en costas peruanas, tratando de obtener un apoyo de Tokio a la causa de su "reivindicación". Esto llevó a reuniones entre el propio Bánzer y su homólogo peruano, Alberto Fujimori.

En tanto, y no pudiendo esconder más la situación generada por estos actos y los reclamos contra las minas, el Canciller chileno José Miguel Insulza no tuvo más remedio que reconocer públicamente el estado de "tensión verbal" (según lo calificó) en que se encontraban las relaciones con Bolivia, el 16 de octubre. Unos días antes, el mismo ministro había declarado ante la inminente búsqueda boliviana de apoyo internacional:

"Es tradicional que los problemas internos de la política boliviana se resuelvan a costa nuestra; no es la primera vez que pasa y seguramente va a volver a pasar muchas veces en el próximo período".

El 22 de noviembre siguiente, Baptista advertía a los medios de prensa nacionales que Bánzer habíale encomendado una nueva estrategia de acercamiento a sus aspiraciones marítimas, agregando que ése era "el tema central, el tema que no nos deja dormir" ("La Tercera", domingo 23 de noviembre de 1997). Una semana más tarde, el Canciller boliviano Javier Murillo -con su habitual actitud ladina y solapada-reclamó desde su puesto contra lo que llamó "informes no oficiales" según los cuáles Chile estaba reforzando militarmente las fronteras con sus tres vecinos, por lo que La Paz ordenaba reforzar el patrullaje, según lo confirmara el Comandante Interino del Ejército paceño, José Aroyoa.

Sin embargo, revelando más sinceramente el sentido que tenían estas calumniosas denuncias, el 29 de noviembre el Ministro de Defensa de La Paz, Fernando Kieffer, declaró también a la agencia AP en la capital paceña -con el descarado cinismo que caracteriza a los políticos altiplánicos- que (los destacados son nuestros):

"...es increíble <u>que Chile esté inmerso en una carrera</u> <u>armamentística de magnitud,</u> mientras que sus naciones vecinas, como Bolivia, tienen como principales postulados <u>la buena vecindad y la integración</u>".

Coincidentemente, el día 1º de diciembre Kieffer y Murillo viajaban a Ottawa, Canadá, para firmar la convención contra el uso de minas antipersonales. Los chilenos también firmaron este irresponsable acuerdo ese mismo mes, según hemos visto más arriba.

El escalofriante entreguismo demostrado por Chile en diciembre de 1998, al abrir las aberrantes revisiones de la frontera con la Argentina por el Acuerdo Parlamentario de Campo de Hielo Sur, tuvo el doble efecto de, por un lado, hacerle creer a La Paz que se alejaba el peligro de tensión militar chileno-argentina del que tantas veces habían sacado provechos diplomáticos y que ahora esperaban con entusiasmo (teoría de la constante del aliancismo regional entre los tres vecinos de Chile); pero, por otro lado, logró abrir optimistas panoramas sobre lo esperable de las autoridades chilenas, que habían sido capaces de validar de la nada un conflicto territorial

absolutamente ficticio, con la correspondiente nueva entrega de territorio.

Intentos por involucrar a los EE.UU. Caso de río Silala 🛖



Así, en una nueva fase de la campaña, desde marzo a junio de 1999, Bánzer no hizo más que insistirle al mundo de las necesidades "reivindicacionistas" bolivianas en el Norte de Chile, repitiendo viejas y gastadas fórmulas a la espera de algún efecto.

Los representantes bolivianos en Washington consiguieron, hacia julio de 1999, que grupos liberales de los Estados Unidos metieran la cola en el conflicto, a través del ministro Kenneth MacKay, que de súbito apareció en los medios ofreciéndose como una posible "solución" mediadora para el problema limítrofe. La Casa Blanca, con el controvertido Bill Clinton al mando, no se arriesgaba entonces a dejar insatisfechos a sus aliados más cercanos y fanáticos de la globalización, a quienes les había perdonado ya millones de dólares de la deuda externa en 1991, como dijimos.

Sin embargo, el entreguismo compulsivo actuó nuevamente y, a principios del 2000, el entonces Canciller Juan Gabriel Valdés se mostró partidario de instaurar una "agenda abierta" con Bolivia, que atendiese también su reclamo. Fue como abrir la ventana de un avión en pleno vuelo, pues La Paz hacía años que había deiado de tomar en consideración que todas estas voluntades de solucionar la pretensión marítima boliviana no incluían cesión de soberanía chilena.

La agresividad de Bánzer habría de quedar clara, también, el 28 de febrero de ese año, al anunciar su negativa a asistir al cambio de mando de Ricardo Lagos en Chile, a pesar de que hacía sólo unos días los cancilleres chileno y boliviano se habían reunido en Portugal a discutir (o "negociar", no lo sabemos bien) el eterno tema de la mediterraneidad. Bánzer sí asistió después -en cambio- a la ceremonia en que el polémico mandatario Alberto Fujimori asumía su viciado y efímero tercer período del Perú, siendo una de los dos o tres autoridades internacionales presentes.

Poco después, formalizaba su amenaza de cerrar el cause del río Silala, en la frontera, en una abierta violación del Tratado de 1904 y a la Concesión otorgada por el Departamento de Potosí en 1908. Trabajos realizados a principios de siglo en la ciénaga donde se origina el cause de agua fueron usadas en La Paz como excusa para reclamar que todo el hilo fluvial era un "canal artificial" creado por Chile y que, por lo tanto, debía cancelarle al Altiplano millonarias sumas de dinero como "indemnización" por años de usos ilegales de sus aguas. Se repetía así una fórmula de creación artificial de litigios fronterizos. como en el caso del río Lauca, que aún representa un foco de tensión limítrofe con ese país.

No satisfecho, el día 24 de marzo, en un discurso ante militares bolivianos, Bánzer volvió a tomar posiciones sobre el tema de "la salida al mar" alegando, esta vez, que su país ya no podía seguir "enclaustrado" en pleno Siglo XXI. El Jefe del Ejército de Bolivia, General Jorge Zabala, anunció adicionalmente su deseo de reabrir el debate con Chile sobre la salida de Bolivia al Pacífico, para buscar *"una solución que favorezca al Estado boliviano"*. Bánzer aludió en sus palabras al perfume que más seduce a los estreguistas chilenos: "El sentido de integración y de globalidad". Lo había demostrado él mismo apelando otrora a la OEA, y por entonces, también a la ONU, una unión continental contra Chile.

En contraste, por esos mismos días el Congreso Nacional de Chile ratificaba la decisión de 1997 de retirar la minas antipersonales, en sesión del 7 de mayo del 2001. En la ocasión, se alegaron precisamente las razones humanitarias esgrimidas por Bolivia para ratificar el Convenio.

El día 23 de junio, el el canciller boliviano, Javier Murillo, expresaba en tono amenazante:

"Bolivia no cambiará su política exterior, porque la solución de su mediterraneidad no sólo beneficiará al país, sino también a la comunidad internacional y a la paz regional...".

Otra vez. Bolivia se sentía en el centro del destino del mundo...

Intentos por involucrar al Vaticano. Truculencia paceña 🛖



Hacia junio del 2001, el Vaticano hacía noticia mundial al anunciar la revelación del Tercer Secreto de Fátima, que habría advertido del intento de asesinato del que fue víctima el Papa, el año 1981, en la Plaza de San Pedro, según se comunicó. Aprovechando la atención mundial, el 26 de junio, el Presidente Bánzer -como parte de su descomunal campaña de los últimos meses- había partido hasta allá para entrevistarse con Su Santidad Juan Pablo II y lanzarle algunos llantos sobre el tema de la "mediterraneidad". Su viaje incluía también un paso por Italia y Alemania. Vale recordar que, dos días antes, se había descartado definitivamente una eventual cumbre entre el Presidente Lagos y el Presidente Bánzer, aprovechando las reuniones del MERCOSUR.

Esa misma semana, Bánzer había comunicado su decisión de no volver a insistir en instancias internacionales sobre el deseo de "salida al mar". Efectivamente, el 25 de junio los medios bolivianos y chilenos reprodujeron una supuesta declaración de Bánzer, respecto de renunciar momentáneamente a las reclamaciones de salida al mar a nivel de tribuna internacional. Así lo señaló el ministro de información de este país, Manfredo Kempf, indicando que Bolivia no expondría el tema de su irrenunciado deseo de salida al mar en la gira de Bánzer por Europa, que incluía el Vaticano, no obstante que el Canciller Murillo, declararía casi simultáneamente que su país jamás renunciaría a esos foros internacionales para hacer sus ya apolilladas demandas ni para satisfacer sus aspiraciones de salida al Pacífico.

Poco duró la promesa, sin embargo, porque al salir del Vaticano, aseguró haber recibido apoyo Su Santidad, quien le habría manifestado su deseo de que el conflicto de Bolivia contra Chile fuera resuelto a través del diálogo:

"El Santo Padre hizo votos por la solución de nuestros problemas por la vía del diálogo y la paz. Me transmitió un aliento moral".

Es curioso ver que Bánzer intentaba la misma estrategia hecha para la Argentina por Carlos S. Menem, hacía sólo un par de años atrás y a propósito del asunto de Campo de Hielo Sur, al apelar a la autoridad del Sumo Pontífice para cargar a su favor la balanza en asuntos limítrofes con Chile (ver nuestra carta A Su Santidad el Papa Juan Pablo II). Indicios de la bajísima moral que reina con frecuencia entre los demagogos y líderes políticos de nuestro continente.

Estas declaraciones (con el supuesto apoyo papal) eran emitidas en momentos en que en Bolivia se tejía otra fuerte campaña antichilena, verificable en los medios de comunicación de la nación altiplánica y ligada preferentemente al asunto del río Silala. La Paz volvía a la carga en los foros internacionales recurriendo al recurso de la intriga y la tergiversación, recursos habituales en su clase política en crisis ética crónica.

Pero, al contrario de las palabras de Bánzer, la Santa Sede jamás emitió la supuesta declaración de "buenos votos" que Bolivia alegaba haber obtenido de Su Santidad. Nunca hubo una sugerencia siguiera de que tal intención existiera y, de hecho, hasta el día de hoy los mecanismos oficiales de comunicación y difusión de la Plaza de San Pedro no se han referido a ningún acuerdo de este tipo o a alguna expresión por el sentido que, supuestamente, habría tenido. Su Santidad Juan Pablo II falleció sin haber reafirmado jamás la supuesta declaración y, por el contrario, su sucesor Benedicto XVI sólo volvería a comprometer al Vaticano con respecto a Bolivia, simplemente deseándole que recuperara la paz y el orden durante las violentas jornadas de junio de 2005 y las amenazas de guerra civil. El tema del mar, como se ve, jamás asomó entre las inquietudes de la Basílica de San Pedro.

Todo sería, por lo tanto, un divertido y simple volador de luces si no fuese por la gravedad y la deshonestidad de parte de La Paz, al tratar de involucrar a la figura del Santo Padre en una vulgar y truculenta treta política en favor de sus intereses territoriales sobre la soberanía chilena.

Últimos muñequeos de Bánzer. Debut de Jorge "Tuto" Quiroga 🛖



El integracionismo, amedrentado, preparó el camino para que el 4 de julio el Presidente boliviano manifestara su deseo de reunirse con Ricardo Lagos, en la reunión de Brasil de la Cumbre Sudamericana del MERCOSUR que venía en camino, instancia que poco antes había rechazado Bánzer.

La agenda altiplánica era el río Silala y, por supuesto, la "salida al mar". Como en el caso del Lauca en 1962, hoy un río servía para agitar el verdadero tema de fondo. En efecto, el día 5 el Canciller Murillo, declaraba con prepotencia y soberbia "no temer" a una demanda internacional de Chile contra Bolivia en el asunto del Silala. Demanda que, por lo demás, el entreguismo nunca tuvo la voluntad de concretar. "Un tribunal internacional no asustaría ni al gobierno ni al pueblo boliviano", señaló Murillo.

Bánzer había sido astuto al generar estos constantes "vaivenes" en la disputa con Chile. Llegó a hablar otras supuestas solidaridades internacionales de dudosa credibilidad, a parte de las vaticanas, de las que tampoco se volvió a hacer referencias. La estrategia era, evidentemente, exagerar en apariencias la permanente molestia boliviana contra Chile e intentar darle mayor gravedad pública al asunto de la que en realidad tiene frente a la comunidad internacional. Un nuevo intento de causar presiones sobre un tema ya finiquitado y sin discusión.

Pero, la necesidad de Bánzer de retirarse del cargo presidencial, producto de una lamentable enfermedad que le quitara al vida al año siguiente, colocó provisoriamente en el 2001 a una generación de políticos de nueva cepa en el Palacio Quemado, con más características negociadoras y modernas, representada en el joven tecnócrata Jorge "Tuto" Quiroga. Se pensó de inmediato que el debate evolucionaría hacia nuevas perspectivas de la irrenunciada "salida al mar"; y, en efecto, así fue.

En agosto de 2001, el Gobierno de Chile buscó la ostentación ante la mirada de la comunidad regional y organizó la carísima reunión del Grupo de Río en Estación Mapocho. Sin embargo, desde el principio quedó claro que la mayor parte del libreto de los mandatarios serían los llamados de causa común al FMI para un nuevo préstamo de dinero a la Argentina, ya entonces sumida en el caos y el colapso económico, lo que pareció ser el objetivo real de todo el encuentro. Quiroga, por su parte, no perdió la oportunidad de dejar en claro que el tema prioritario de Bolivia, hoy como ayer, era la entrega de una costa por parte de los dueños de casa de aquella reunión, con aceptación de propuestas nuevas y creativas, pero que satisfagan finalmente el reivindicacionismo. Curiosamente, las necesidades de Chile como país anfitrión, fueron las menos atendidas o consideradas en medio del huracán de peticiones propias del resto de la comunidad y del evidente plan de presión en favor de los préstamos para la Argentina, país que, paradojalmente, por esos mismos días perseguía a los exportadores chilenos acusándolos de proteccionismo, llegando a adulterar informes sobre la presencia de fiebre aftosa en su territorio para evitar el corte importaciones de carne hacia Chile. Cosas americanismo, sin duda.

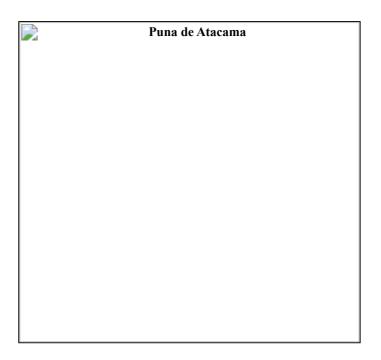
Hasta ese momento, sin embargo, y considerando la conducta que había ofrecido históricamente Bolivia, nada había allí de los "veranitos de fresa" donde aparentemente vuelve a imperar la cordura y la moderación, como para no anticipar que Altiplano volvería tantas veces como pueda a los organismos internacionales, o donde quiera que hayan público y micrófonos, a reiterar su demanda marítima. No hay "puntadas sin hilo".

Coincidencia o no, por aquellos meses rondaba la denuncia de un medio de prensa chileno de que el mentado proyecto de gasoducto desde Tarija hasta costas chilenas, había generado peligrosos proyectos de acuerdo desde 1998 a la fecha, al descubrirse nuevas reservas de gas en la provincia boliviana. Según se dijo, el Gobierno de Chile planeaba conceder en calidad de comodato, por 99 años, una cesión de territorio costero para Bolivia con soberanía propia y derechos autónomos, en otra de las tantas propuestas históricas evaluadas para concederle a Bolivia una virtual salida soberana al mar. El Gobierno de Ricardo Lagos jamás confirmó ni desmintió esta noticia, pero, ante la incertidumbre y la lluvia de críticas que cayeron sobre La Moneda, el 11 de septiembre del 2001 se vio en la obligación

de admitir que, cuanto menos, había existido un "acercamiento" con La Paz en torno al asunto del gasoducto.

Desde aquel instante se desataría una fuerte controversia de parte de Bolivia, esta vez sin máscaras, por obtener satisfacciones a sus aspiraciones portuarias por la vía del negocio gasífero, por un lado. pero por el otro con la férrea y masiva obstinación de los grupos que se negaban a llegar a cualquier clase de acuerdo con el "expansionismo chileno".

Sería el siguiente gobierno, sin embargo, el que debería pagar en La Paz la crisis desatada por esta controversia interna.



Publicación de la prensa boliviana en La Paz al saberse de las banderas izadas como protesta en dos cerros de Taltal (15 de septiembre de 1998)

Bolivia dividida por proyecto del Gasoducto 🛖



Tras las elecciones a que llamó el gobierno provisorio de Jorge "Tuto" Quiroga en La Paz, en junio 2002, los candidatos se vieron en la obligación de tener que incluir en sus campañas posiciones específicas sobre el asunto del gas boliviano y su posible paso por Chile.

Como dijimos, un grupo no poco importante de políticos bolivianos habíase creado la expectativa de que una negociación para sacar el gas de Tarija por Chile, podría ser el mecanismo para "recuperar la cualidad marítima" del país altiplánico, siguiendo en gran medida las sugerencias ignaras e ilusas de los propios entreguistas chilenos simpatizantes de la causa de la "reivindicación" boliviana y, en algunos casos, con grandes intereses personales en el éxito de tal proyecto. Entre otras cosas, sin embargo, ignoraban el clima de antipatía de la mayor parte del electorado de Bolivia a esta clase de negociación, que era considerada como un verdadero acto de traición o alianza con el enemigo histórico chileno.

De este modo, los bandos bolivianos formados en torno a la posibilidad de sacar el gas por territorio chileno (por Iquique,

Antofagasta o Mejillones) ya estaban listos y enfilados durante las elecciones de ese año. Por un lado, estaban los que compartían el optimismo del entreguismo chileno, en cuanto a establecer planes de integración por la vía del gas, a pesar de que ya se había advertido desde Santiago que el proyecto no contemplaba cesiones definitivas de soberanía, en vista del masivo rechazo popular a cualquier tentativa de entrega. Por el otro lado, estaban los que -en mayor número y con más llegada al populacho- reclamaban que el gas debía ser sacado no por Chile, sino por Perú, particularmente por el puerto de llo, a pesar de la completa inconveniencia económica que todos los estudios serios le atribuían a esta opción. Se alegaban como "argumentos" las desconfianzas históricas contra la monserga del "imperialismo chileno" y se hacía correr la idea de que los chilenos necesitaban urgentemente el potencial energético del gas de Tarija, por lo que era ambicionado desmedidamente por La Moneda y por el mismo pueblo. Esto, a pesar de que varias encuestas habían demostrado el masivo rechazo chileno al proyecto incluso en la conciencia de que las malas políticas energéticas de la Concertación iban a tener un duro costo para el país.

Pero, contrariamente a lo que el contexto exigía, los planteamientos de los candidatos al Palacio Quemado resultaron más bien ambiguos y poco claros con graves consecuencias, según veremos. Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada ganó las elecciones frustrando las aspiraciones de, principalmente, Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). Volvía así al Palacio Quemado, en un clima social incierto.

Aprovechando la situación, Morales, que era por entonces diputado abanderado de indígenas y cocaleros, se propuso desde el primer momento impedir el éxito del nuevo paso de Sánchez del Lozada por el Gobierno, para abrirle paso a sus frenéticas aspiraciones presidenciales. Otro negro período de la historia boliviana estaba por comenzar a escribirse.